JUZGADO UNDÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Medellín, diecinueve de octubre de dos mil veintidós

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Luis Carlos Vargas Patiño
Demandados	Juan Carlos Gaviria Trujillo y otra
Radicado	05001-31-03-011-2020-00054-00
Decisión	Decreta pruebas; y Anuncia sentencia anticipada.

1. Bien que la parte ejecutada aceptó buena porción de los hechos y manifestó estar «*parcialmente de acuerdo*» con la pretensión primera y principal, lo cierto es que no precisó el alcance de su acuerdo, sino que interesó profundas inconformidades ante la globalidad del cobro promovido por el ejecutante. Tales disensiones –plasmadas en forma de excepciones de mérito– merecen ser abordadas en sentencia definitiva, de conformidad con el artículo 278 del Código General del Proceso, sin previo lugar a la sentencia parcial de que trata el último inciso del artículo 98 *eiusdem*.

2. Resulta completamente improcedente la «petición de parte» que elevó el extremo pasivo, consistente en que se «*decret[e] la reforma de la demanda*» de conformidad con el artículo 93 del Código General del Proceso. Basta advertir que la compostura o modificación de la demanda es un eminentísimo acto de parte, y este Juzgado no puede, superado hace tiempo el examen de admisibilidad, agregarle al libelo genitor ni una jota ni una tilde que no haya emanado del pecho del actor. Su laborío será el de interpretarlo, pero jamás el de mutarlo.

Cabe agregar que la parte ejecutada sustentó su pedimento en dos razones: la una, porque –a su juicio– el actor omitió enunciar los «*hechos reales de la negociación*» y acompañar todas las pruebas del caso; la otra, porque no viene integrado todo el contradictorio con los demás contratantes relacionados con la transacción, quienes estima litisconsortes necesarios del extremo pasivo.

Lo primero refulge insostenible. Si el actor obró a ventaja y con omisión de pruebas y de hechos, según se afirmó, cumplía a la parte ejecutada estructurar su respuesta defensiva sobre la base de tales omisiones, supliendo ella lo obviado y esgrimiendo las excepciones correspondientes, como efectivamente se hizo. Lo segundo reluce improbable. Si bien es cierto que el Juzgado tiene el deber de velar por la integración del contradictorio y llamar a los consortes necesarios, según el artículo 61 *eiusdem*, no menos cierto es que la parte ejecutante estructuró su reclamo sobre un supuesto de solidaridad, y no de necesidad; nótese que cuando el ejecutante subsanó el libelo introductorio, señaló diáfananamente que no pretendía llamar otras personas morales (archs. 1.8 y 1.9 c. 1).

3. Lo dicho en precedencia descarta la nulidad que la parte ejecutada insinuó desde la excepción de mérito «n.º 1.8». Cualesquiera incertidumbres fácticas y probatorias incumben al fondo del asunto, y si la parte ejecutada consideraba que un problema procesal entorpecería radicalmente la ejecución *desde la demanda*, como alega con tanta insistencia, debía entonces proponer recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento ejecutivo e interesar a través de él excepciones previas, mandato insoslayable de los artículos 430 y 442.3 del Código General del Proceso.

Agréguese que no todos los señalamientos de la ejecutada caben en los supuestos del artículo 133 *eiusdem*. Solamente cupiera, de hecho, el que atañe a la integración defectuosa del contradictorio, evento anteriormente descartado en segundo acápite. Es así que la aludida nulidad repugna a los principios de taxatividad y convalidación.

4. Sería del caso, entonces, citar a la audiencia que contempla el artículo 443.2 del Código General del Proceso, si no fuera porque este Juzgado advierte la posibilidad de proferir sentencia anticipada, en virtud del numeral 2.º del artículo 278 *eiusdem*, por falta de pruebas practicables.

Considerados los principios procesales de celeridad y economía, en efecto, no cree el Juzgado que haya motivo alguno para convocar a la vista pública, cuando el cobro de presente interés gira sobre el eje de las pruebas documentales que actualmente militan en el expediente.

Más precisamente, el Juzgado define el siguiente decreto de pruebas:

4.1. SOLICITADAS POR LA PARTE EJECUTANTE.

a. Documentales. Se tendrán como pruebas todos los documentos que con ese carácter acompañó a la demanda la parte ejecutante.

Cabe señalar que el citatorio para notificación personal, allegado el cuatro de octubre pasado, no se erige en una prueba documental, como erróneamente señaló el extremo pasivo. Se trata de una simple constancia postal que sólo se examina para efectos de notificación, etapa ya superada, y pacífica desde el auto que la tuvo notificada por conducta concluyente.

4.2. SOLICITADAS POR AMBOS EJECUTADOS.

a. Documentales. Se tendrán como pruebas todos los documentos que con ese carácter se acompañaron a la contestación, común a ambos ejecutados.

b. Oficios. Se niega la solicitud de oficio con destino a Acción Fiduciaria S.A., por cuanto el extremo ejecutado no allegó prueba siquiera sumaria de haber intentado obtener tales documentos directamente, o en ejercicio del derecho de petición. Por ello, el Juzgado tiene el deber de abstención previsto en los artículos 43.4, 78.10 y 173 del Código General del Proceso.

Los otros dos pedimentos bajo el acápite de «*documentales para oficiar*» no son, en estrictez, peticiones probatorias, con lo que el Juzgado se sustrae de pronunciarse sobre ellos. Con todo, terminan siendo oblicuamente resueltos por lo dicho en los acápites segundo y tercero de este auto, a los cuales, por mor de brevedad, se remite.

5. Una vez ejecutoriada esta providencia, se procederá a dictar sentencia anticipada dentro del término previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso.

6. Por último, el Juzgado no ignora que la parte ejecutada pidió que se convocara a la vista pública con el ánimo «*dirimir*» allí el conflicto «*con [su] intermediación*». Esta petición de parte, empero, no puede obstaculizar el deber judicial de dictar sentencia anticipada cuando no haya pruebas practicables, pues es con ella que se verifica el desiderátum de la economía procesal. Queda en las partes acudir a los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos que estimen conducentes, claro está, antes de proferirse la sentencia.

Firmado Por:
Beatriz Helena Del Carmen Ramirez Hoyos
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 011
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **28320d14cdf825eb3786ac8f1294604ef226c55215a5ad0223376c1a630c7833**

Documento generado en 20/10/2022 09:23:26 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>